

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. *Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en México.* México: Instituto Federal Electoral y El Colegio de México, 2014. 280 pp. ISBN: en trámite.

Una de las funciones del Instituto Federal Electoral en México (hoy rebautizado como Instituto Nacional Electoral) es fomentar y apoyar el desarrollo de valores democráticos en la ciudadanía. Para ello, el Instituto financia la realización de investigaciones que permitan generar diagnósticos para conocer los valores, las creencias y las prácticas políticas de la ciudadanía. El Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en México se inserta precisamente dentro de esta estrategia de aliarse con universidades, en esta

ocasión, el Colegio de México, para desarrollar diagnósticos que le permitan conocer más sobre la manera en que la ciudadanía mexicana se relaciona con las instituciones, con el Estado y con otras personas; como percibe su rol en la sociedad y cuáles son sus comportamientos políticos.

La investigación persigue dos objetivos claves. Por una parte, describir y comprender los niveles de calidad de la ciudadanía en México, a partir de una serie de dimensiones, que son las que estructuran la obra: a) Estado de Derecho y acceso a la justicia; b) participación Política; c) Sociedad Civil y Participación no Electoral; d) Vida Comunitaria; e) Valores Democráticos; f) Redes de Asociación e Implementación. Por otra parte, identificar los factores que explican los bajos niveles de calidad de la ciudadanía en el país, como las condiciones de pobreza y marginalidad, la persistencia de prácticas autoritarias y el clientelismo, la desigualdad y las amenazas a la seguridad.

El estudio parte de la premisa de que los valores ciudadanos son claves para el desarrollo del régimen político. Esto significa que la democracia requiere un conjunto determinado de valores para poder funcionar. Sin esos valores resulta muy difícil contar con un sistema político democrático. ¿Cuáles serían esos valores? La tolerancia, la confianza interpersonal e institucional, la preferencia del régimen democrático como mejor régimen de gobierno, el respeto al pluralismo, al disenso y a la legalidad. Ahora bien, el estudio no se centra sólo en las prácticas convencionales que hacen a la ciudadanía sino que parte del concepto de ciudadanía activa, incluyendo formas de participación nuevas y no convencionales, además de actividades políticas tradicionales como el voto o la militancia en partidos u organizaciones civiles.

En términos metodológicos, la investigación es muy rigurosa e innovadora, por la combinación de diferentes estrategias de investigación y por la puesta en práctica de diferentes conceptos. Las dos estrategias de recolección de datos de la investigación son: primero, una encuesta personal con 11.000 entrevistas en hogares a mayores de 18 años, en 5 regiones, 10 estados y 12 municipios. Esto supone que el estudio contó con una fuente de datos original para conocer las percepciones y prácticas de la ciudadanía. Segundo, un análisis de redes con 169 entrevistas, en 4 estados y 12 municipios, con el objetivo de conocer los patrones de asociación, alianzas y reivindicaciones entre actores de la sociedad civil.

¿Qué enseña el Informe PAIS sobre la calidad de la ciudadanía política de los mexicanos? El principal argumento del trabajo es que existen cimientos precarios para el desarrollo de una democracia de alta calidad en el país. Los niveles de capital social son bajos, existe una gran desconfianza de los ciudadanos a las instituciones, a los actores políticos (y a otras) personas de su entorno, cree que los políticos no se ocupan de sus demandas y hay un creciente desencanto con los resultados de la democracia. Los ciudadanos participan poco en los grupos políticos que facilitan la relación con las instituciones políticas (como los partidos, los sindicatos u otros) y se asocian poco a nivel sindical o empresarial (en un nivel menor al de Estados Unidos y al de Brasil), aunque participan de manera activa en organizaciones religiosas (como en EE. UU. o Brasil).

Los datos también indican que el mexicano discrimina y es discriminado por su clase social, su color de piel, por ser indígena y por su apariencia física. No cree en el Estado de Derecho, ni en la eficiencia del Estado para cumplir con sus tareas. El 66%

sostiene que no se respetan las leyes, no denuncia los delitos y no confía en las autoridades o ha tenido malas experiencias en el pasado que hace que no denuncie esos delitos, lo que supone una cierta cultura de la ilegalidad. Sólo tres organizaciones cuentan con más del 50% de confianza: el Ejército (62%), los maestros (56%) y la Iglesia (55%). Se confía más en el gobierno federal que en los gobiernos del Estado y municipios mientras que se confía muy poco o casi nada en los partidos y los políticos.

Los datos muestran que si bien creen en la democracia y en las autoridades elegidas democráticamente, también perciben que esa democracia beneficia a pocos. La vida comunitaria es escasa y existen déficits de participación cívica. La ciudadanía rechaza en gran medida la participación no convencional, como las protestas o toma de edificios, como una manera viable de expresar sus demandas. Aun cuando esto varía por regiones, los mexicanos creen que sus acciones no importan ni tienen influencia sobre los procesos políticos (lo que en psicología social se denomina bajo locus de control y bajo sentimiento de eficacia externa), lo que inhibe la acción colectiva.

La ciudadanía no es una condición individual sino relacional, tiene que ver con el tipo de vínculo que los individuos tienen con otros. Ciudadanos más interconectados supone más capital social y más cultura política. Los ciudadanos mexicanos carecen en su mayoría de contactos relacionales, por tanto, la densidad del capital social es muy baja, lo que dificulta el funcionamiento del sistema político en su conjunto pero, fundamentalmente, el vínculo con las instituciones políticas. Según la encuesta de redes, desarrollada para la investigación que da sustento al Informe, casi dos tercios de los mexicanos carecen de puntos de relación (66,2%) o no tienen ningún contacto.

La situación de las mujeres es muy alarmante. Son las que tienen menos contactos y están más aisladas para ejercer sus derechos que los hombres. Aun cuando la educación, el nivel socioeconómico o la participación política en un partido o en campañas electorales incrementa los niveles de relación, las relaciones existentes son informales y personales (basadas en relaciones de familia, amigos, conocidos) o personas que ya se conocen previamente por pertenecer a una misma clase social, vecinos y compañeros de trabajo.

El Informe plantea ciertos desafíos. ¿Qué se puede hacer para mejorar los vacíos de ciudadanía cívica y de participación que denuncia la investigación? ¿Qué mecanismos desarrollar para superar esos vacíos? Las estrategias pueden ir desde el fortalecimiento de la vida comunitaria, con la promoción de la participación de los individuos de manera individual así como también el apoyo activo a las organizaciones de la sociedad civil, con fondos fiscales y financiamiento económico del sector público. Educar a los individuos en valores cívicos se convierte en una tarea central de los organismos públicos, desarrollando una estrategia transversal de incentivos, promovida por diversos actores, públicos y privados, del Estado y la Sociedad Civil. Por todo ello, el trabajo construye un diagnóstico nítido con la idea de generar una herramienta clave que permita mejorar las políticas públicas en el marco de una Estrategia Nacional de Educación Cívica del país.

Flavia FREIDENBERG
Instituto de Iberoamérica
Universidad de Salamanca